**REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL**

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

Purificación, Tres (03) de mayo de dos mil veinticuatro
(2024)

PROCESO : Tutela
ACCIONANTE: Edwin Hernán Oyola Viuche
ACCIONADO : Sede Operativa de Transito- Purificación Tol
RADICADO : 73-585-40-89-001-2024-00057-00
(R: I:7028).

Procede el Despacho a decidir de fondo la acción de tutela interpuesta por Edwin Hernán Oyola Viuche contra Sede Operativa de Transito- Purificación Tol, por la presunta violación al derecho fundamental de petición y art 20 de la C.N.

ANTECEDENTES

Expone el accionante Edwin Hernán Oyola Viuche, en su escrito de tutela, los siguientes hechos:

1.-Que el día 22 de febrero de 2024 envió derecho de petición por medio del radicado 202402226CCC36B a la Secretaria de Tránsito y Transporte Purificación Tolima, sin que a la fecha haya recibido respuesta ni copia de los documentos públicos solicitados a los que tiene derecho a tener acceso según el artículo 74 de la Constitución y que de no ser ellos competentes para resolver la petición, están en el deber de remitirlos al que consideren competente según el artículo 21 Ley 1437 de 2011.

Derechos vulnerados:

El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y el contemplado en el artículo 20 Ibídem, argumentando sobre la procedencia y legitimidad,

Pretensiones:

**REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL**

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

- 1- Se le ampare su derecho fundamental de petición.
- 2- Se ordene al accionado, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia produzca la respuesta.

TRAMITE PROCESAL

Mediante auto de fecha 19 de abril del presen año, este despacho avocó el conocimiento de la acción de tutela, concediéndole a la accionada un término de dos (02) días para que ejerciera su derecho de defensa, vinculándose además a la Secretaria de Transito y Transporte del Tolima.

DE LAS RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y LA VINCULADA

La Secretaria de Tránsito y Transporte de Purificación –Tolima, a través de la Profesional Universitaria de la sede operativa de Purificación-Tolima DATT, Gineth Melissa Bonilla Florián, manifiesta frente a los hechos y derechos por los cuales esta acción no debe prosperar en contra de la sede Operativa de Transito de Purificación, por cuanto revisado el sistema en el que se radican todas las peticiones que los diferentes usuarios elevan ante la Sede Operativa de Transito de Purificación Tolima, y el correo institucional, se avizora que el accionante no ha radicado petición en su sede, toda vez que revisado el escrito de tutela presentado refiere número de radiado el número de radicado 202402226CCC36B a la Secretaria de Tránsito y Transporte Purificación Tolima, la cual no fue recibida en esas entidad, se desconoce el recibido de dicha solicitud deprecada por el señor EDWIN HERNAN OYOLA VIUCHE.

-Que, ese organismo de transito no es una dependencia adscrita a la alcalde de Purificación Tolima, pues se encuentra adscrita es al Departamento del Tolima, además la petición que dice presento el señor EDWIN es de competencia y soporte de la Secretaria de Transito Departamental del Tolima, entidad que tiene la gestión fiscal y cobro de las multas de tránsito que se impongan en jurisdicción del municipio de Purificación Tolima, por lo cual es dicha dependencia la que debe dar

**REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL**

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

respuesta de fondo al ciudadano, una vez el mismo haga la radicación de su solicitud.

-Que, por lo anterior, no es cierto que esa entidad haya violado o desconocido derechos fundamentales de PETICION, DEBIDO PROCESO y la IGUALDAD, razón por la cual es procedente que se desvincule a ese organismo de Transito d la acción constitucional que nos ocupa.

Que, en pretérito tiempo ya el accionante había presentado ora tutela conocida por este mismo juzgado radicada bajo el No.73-585-40-89-001-204-00018-00 (R:I:6989) la cual fue fallada y que versaba sobre una petición de igual contenido que la que nos ocupa , y que además en esa ocasión en respuesta se le indico cual era la entidad competente para resolver la cuestión de su petición .

-Que el señor EDWIN HERNAN OYHOLLA VIUCHE ha obrado con temeridad por tratarse de una petición repetitiva y que ya fue objeto de una acción de tutela.

Pretensión

No acceder al amparo deprecado teniendo en cuenta que esa sede operativa no ha vulnerado los derechos del accionante, como quiera que la petición deprecada fue trasladada al competente para lo de su resorte, dentro de la oportunidad y términos contemplados en la Ley 1437 de 2011, por lo cual es procedente desvincular esta dependencia de este trámite constitucional.

Por su parte, el doctor LUIS ARTURO MENDOZA ALEMAN, Secretario de Tránsito y Transporte del Departamento Administrativo de Transito del Tolima, sede Ibagué manifestó:

Que al señor EDWIN OHYOLA, se le dio respuesta mediante oficio STT 120-0368 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, DONDE SE LE INDICABA AL PETICIONARIO QUE SE negaba LA PRESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPERENDO No. 99999999000004319782 del 11 de agosto de 2020,

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

debido a que se encuentra en etapa de proceso de cobro coactivo dentro del cual profirió mandamiento de pago No. 2441 del 18/04/2023, respuesta que le fue emitida al accionante el día 16/02/2024 al correo electrónico edwinviuche930@gmail.com POR TANTO, ESE DESPACHO HA DADO CUMPLIMIENTO A LA ACCION DE TUTELA..

Que, a partir de las anteriores consideraciones, se concluye que la presente acción de tutela resulta improcedente por cuanto el hecho generador de la acción se encuentra superado ya que se accede a las pretensiones del accionante.

Continuo considerando sobre lo que es la figura de hecho superado y termina solicitando al juzgado se sirva excluir a esa secretaria de tránsito y transporte, y declarar improcedente dicha acción de tutela dado que no se le esa vulnerando ningún derecho fundamental ni se le está poniendo en riesgo ninguna de sus derechos, tal y como lo constata la Honorable Corte Constitución, e donde manifiesta que las acciones de tutela son improcedentes cuando resulten derechos amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, anotando que en el caso que nos ocupa se dio debida contestación al accionante.

Como pruebas, allega:

- Copia de la respuesta dada al peticionario junto con la constancia de envió y copia del estado de cuenta donde se evidencia que el comparendo en mención se encuentra en proceso de cobro coactivo

PROBLEMA JURIDICO

Ha de establecer el despacho, si la Sede Operativa de Tránsito y Transporte de Purificación –Tolima, y la vinculada Secretaria de Tránsito y Transporte del Tolima, vulneraron el derecho fundamental de petición al accionante, como consecuencia de no dar respuesta a su derecho de petición que de manera escrita les hizo.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL**

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela” , Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales.

DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

DE LA LEGITIMACIÓN

Por activa.

El art. 86 de la constitución nacional faculta a cualquier persona para promover acción de tutela contra una autoridad pública o un particular en los casos permitidos por la ley, cuando se amenacen o vulneren derechos fundamentales.

En el presente caso, el accionante Edwin Hernán Oyola Viuche se encuentra legitimado para incoar la presente acción de tutela, en aras de proteger su derecho fundamental de petición.

a. Por pasiva

La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental.

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

El artículo 1 del decreto 2591 de 1991 determina que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” (Resaltado fuera de texto)

En este caso, la accionada: Sede Operativa de Tránsito y Transporte de Purificación –Tolima, y la vinculada Secretaria de Tránsito y Transporte del Tolima, son autoridades públicas, por lo tanto, se encuentran legitimados por pasiva para ser demandadas en esta acción constitucional.

DE LA INMEDIATEZ Y LA SUBSISIARIDAD

Determinada la legitimación por activa y por pasiva, debe examinarse los presupuestos de inmediatez y subsidiaridad. En reiteradas oportunidades la jurisprudencia ha sido clara en señalar que la procedencia de la acción de tutela se encuentra sujeta al cumplimiento del requisito de inmediatez.

Al respecto, ha precisado que la protección de los derechos fundamentales, vía acción constitucional, debe invocarse en un plazo razonable y oportuno, ello en procura del principio de seguridad jurídica y la preservación de la naturaleza propia de la acción de amparo.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que si bien es cierto la acción de tutela no tiene un término de caducidad, esto no debe entenderse como una facultad para presentar la misma en cualquier tiempo. Lo anterior, por cuanto a la luz del artículo 86 Superior el amparo constitucional tiene por objeto la protección inmediata del derecho invocado.

En este caso, entre los hechos relatados como violatorio del derecho fundamental de la accionante y la acción de tutela transcurrió un plazo razonable. En efecto, la petición la realizó el accionante el día 22 de febrero

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

del año 2024, y la acción de tutela fue presentada el 19 de abril de 2024, cumpliéndose el presupuesto de inmediatez.

De otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela es de naturaleza residual y subsidiaria y, en consecuencia, su procedencia se encuentra condicionada a que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o existiéndolo, éste no resulte lo suficientemente idóneo y eficaz para la defensa del derecho invocado, circunstancia en la cual, se habilita el uso del amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En este caso no se evidencia que la accionante disponga de otro medio de defensa judicial. La corte Constitucional ha reiterado que: *“la acción de tutela es el mecanismo procedente para determinar la violación del derecho de petición. En esa dirección, la sentencia T-084 de 2015 sostuvo que “la tutela es un mecanismo idóneo para proteger el derecho de petición de los administrados, toda vez que por medio del mismo se accede a muchos otros derechos Constitucionales”. De acuerdo con lo anterior, la Corte ha estimado “que el 5 ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo”.* (Sentencia T-206/18).

CONSIDERACIONES

El accionante invocó como presuntamente violado, el derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política; y, el contemplado en el artículo 20 *Ibidem*.

Del derecho de petición

El artículo 23 de la Carta Superior, consagra: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. Como

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho de petición, se sintetizó las reglas para su protección, en los siguientes términos: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración.

2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata.

3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. g). *En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el*

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto.

El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T- 294 de 1997 y T-457 de 1994.

Derecho consagrado artículo 20:

Dice, " se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicaciones".

Del caso en concreto

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia se ha manifestado sobre la Improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia de una conducta respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de derechos fundamentales.

Ha dicho esta Corete que: *El objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, "cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares [de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Decreto 2591 de 1991]" . Así pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se*

**REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL**

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuación u omisión del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en cuestión.

En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008 , al afirmar que “partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la Constitución, como de los artículos 5° y 6° del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acción u omisión cometida por los particulares o por la autoridad pública que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la procedencia de la acción tuitiva de derechos fundamentales (...) En suma, para que la acción de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (...)”, ya que “sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (...)” .

Y lo anterior resulta así, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipotéticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jurídico, “ello resultaría violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el principio de la seguridad jurídica y, en ciertos eventos, podría constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitiría que el peticionario pretermitiera los trámites y procedimientos que señala el ordenamiento jurídico como los adecuados para la obtención de determinados objetivos específicos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos” .

Así pues, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela.” (Sentencia T-130/14).

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

En este caso, las pruebas allegadas dan cuenta que la accionada le dio respuesta al derecho de petición invocado por el accionante y, esa respuesta cumple con los requisitos exigidos por la misma jurisprudencia constitucional para que no exista violación a este derecho fundamental.

En efecto obra prueba de la respuesta otorgada por la accionada mediante oficio STT 120-0368 del 16 de febrero de 2024, donde se le indicaba al peticionario que se negaba la prescripción de la orden de comparendo No. 99999999000004319782 del 11 de agosto de 2020, debido a que se encuentra en etapa de proceso de cobro coactivo dentro del cual profirió mandamiento de pago No. 2441 del 18/04/2023, respuesta que le fue emitida al accionante el día 16/02/2024 al correo electrónico edwinviuche930@gmail.com .

Recordemos que el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, y la respuesta debe cumplir con los requisitos de oportunidad, resolver de fondo, de manera clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y, además, ser puesta en conocimiento del peticionario. En este caso, sin necesidad de alguna actuación del juez constitucional y antes de ser interpuesta la acción de tutela, la accionada dio respuesta al derecho de petición, le resolvió de fondo, aunque negando lo solicitado y esa respuesta fue precisa y congruente con lo solicitado, existiendo prueba de habersele enviado vía correo electrónico al peticionario.

Para el despacho no existe la figura del hecho superado como lo solicita la accionada en su repuesta, pues *“Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno”*, porque en este caso, en consonancia con la jurisprudencia constitucional, no existe vulneración o amenaza de

**REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL**

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

vulneración al derecho fundamental de petición, es decir, no existe una conducta respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de derechos fundamentales, por cuanto la accionada cumplió con su deber y dio la respuesta de manera oportuna, sin que hubiere sido durante el trámite de esta acción de tutela.

En consecuencia, esta juez constitucional al no encontrar ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela como en efecto se hace.

En mérito de lo anteriormente considerado el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación Tolima, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR por improcedente el amparo solicitado, ante la inexistencia de vulneración al derecho de petición, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes atendiendo a lo establecido en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a H. Corte Constitucional para su eventual revisión de no ser impugnada.

Notifíquese y Cúmplase.

La Juez,

GABRIELA ARAGÓN BARRETO

Firmado Por:
Gabriela Aragon Barreto
Juez
Juzgado Municipal
Juzgado 001 Promiscuo Municipal
Purificacion - Tolima

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2b837f7a38c2a977c3d91a7a621c178a88dbc9e4d882a3974883697c09a53e41**

Documento generado en 03/05/2024 05:13:18 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>